--- RESOLUCIÓN.- 226 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS).-----

--- Ciudad Victoria, Tamaulipas; a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.-----

--- V I S T O para resolver el toca 216/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en los autos del expediente 1214/2019, relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por ***** en contra de *****; visto el escrito de expresión de agravios, la sentencia impugnada, cuanto más consta en autos y debió verse; y -----

----- R E S U L T A N D O: -----

--- PRIMERO.- La sentencia recurrida concluyó bajo los siguientes puntos resolutivos:-----

“--- PRIMERO.- La parte actora probó convenientemente los elementos constitutivos de su acción y la parte demandada no acreditó su materia excepcional, en consecuencia: -----

*--- SEGUNDO.- Ha procedido el Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia promovido por el C. ***** en contra de la C. ***** por lo tanto:-----*

*--- TERCERO.- Se decreta la Cancelación de la pensión alimenticia, consistente en el 30% TREINTA POR CIENTO, sobre el salario y demás prestaciones que percibe el C. ***** en su carácter de trabajador jubilado de ***** con ficha número ***** , decretada a favor de la C. ***** en forma definitiva dentro del*

*expediente número *****del índice de este juzgado, atento a las razones y motivos expuestos en el considerando final de este fallo culminatorio.-----*

*--- CUARTO.- Ejecutoriada que sea ésta sentencia o de susceptible ejecución conforme a la ley, gírese atento oficio al Representante Legal de la referida *****; a fin de hacerle de su conocimiento lo aquí resuelto y proceda en consecuencia a la observancia de su alcance vinculante, esto es, para que lleve a cabo la cancelación de la pensión alimenticia de que habla en el punto decisorio que antecede.-----*

*--- QUINTO.- se le dejan a salvo a la C. ***** los derechos a que se refiere el artículo 279 del Código Civil vigente en el Estado, para que los haga valer dentro del juicio de divorcio tramitado en el Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial, bajo el número de expediente 216/2015.-----*

--- SEXTO.- No se condena a ninguna de las partes al pago de costas judiciales en virtud de que ninguno de los contendientes se condujo con temeridad o mala fe, en términos de lo dispuesto por el ordinal 131 de la Ley del Proceder Civil Local.-----

--- SÉPTIMO.- Notifíquese Personalmente.-

--- SEGUNDO.- Notificada que fue a las partes la sentencia cuyos puntos resolutivos han quedado transcritos, e inconforme la demandada, interpuso en su contra recurso de apelación, el que fue admitido en el efecto devolutivo, por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte; se remitieron los autos originales al Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y por Acuerdo Plenario del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se turnaron a esta Segunda Sala Colegiada en materias Civil y Familiar para la substanciación del recurso de apelación de que se trata; se radicó el presente toca mediante proveído que data del

treinta de agosto siguiente, y se tuvo a la recurrente expresando en tiempo y forma los motivos de inconformidad que estima le causa la sentencia impugnada, quedando los autos en estado de dictar resolución, la que se emite al tenor del siguiente:-----

----- **C O N S I D E R A N D O** -----

--- **PRIMERO.**- Esta Segunda Sala Colegiada en materias Civil y Familiar es competente para conocer y resolver sobre el recurso de apelación a que se contrae el presente Toca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.-----

--- **SEGUNDO.**- La demandada apelante expresó como motivos de inconformidad el contenido de su escritos de diecinueve de agosto de dos mil veinte, que obran a fojas de siete a la doce del toca de apelación; agravios que consisten en lo que a continuación se transcribe:-----

“III. ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.

UNICO

III.1 El Juez de Primer grado, tuvo a bien dictar una sentencia incongruente e infundada, pues los razonamientos jurídicos expresados carecen de un fundamento legal determinado. Se debe observar lo expresado en la sentencia combatida, puntualmente en el considerando cuarto lo que sigue:

- 1. Manifiesta que la suscrita no ostenta derecho a seguir percibiendo alimentos con carácter de definitivos “en virtud de que desapareció el título generador de la obligación”*
- 2. Por lo tanto estima que no sería jurídico condenar al deudor a proporcionar alimentos aun siendo el argumento de la suscrita a)“que durante la subsistencia del vínculo matrimonial (la de la voz) se dedicó única y exclusivamente a las labores del hogar ”; b) que la de la voz no se encuentra*

en ningún supuesto legal conforme al artículo 295 del Código Civil para el estado de Tamaulipas que valide la pérdida del derecho, administrado con el diverso numeral 242 en su fracción VI, del código de procedimientos civiles de Tamaulipas.

En primer lugar, haciendo una sana interpretación a lo versado en el artículo 295 del Código Civil vigente en el Estado, relativo a las circunstancias en que se debe suspender la obligación de dar alimentos, en cuanto a la fracción I “el que la tiene carece de medios para cumplirla”, no se configura en el presente negocio, pues como se señala en la resolución que impugno, se acredita plenamente la posibilidad del actor de proporcionar alimentos (tanto en el momento en que se dictó firme en su caso, la sentencia definitiva sobre alimentos definitivos en favor de la suscrita, como hasta el presente momento en que indebidamente se pretende cancelar los mismos sin haberse acreditado algunas de las causales para así determinarlo tal como se enuncia en el presente párrafo), ahora bien, en cuanto a la fracción II, “cuando el acreedor alimentista deja de necesitar alimentos”, dicha a sobre alimentos definitivos en favor fracción debió ser aplicada en favor de la suscrita por el Juez primario, pues sostiene que debido a la disolución del vínculo de parentesco, la suscrita carece de la presunción de percibir alimentos, de lo que me permito cuestionar, ¿Con la infinidad de tesis aisladas y jurisprudencias que estiman que existe “presunción legal de percibir alimentos” como regla general y sin medios de prueba aportados por el actor del juico que desvirtúen la presunción legal de percibir alimentos como lo marca la fracción II del precitado artículo, es decir sin prueba alguna de que la suscrita en mi calidad de acreedor alimentista dejara de necesitar alimentos la autoridad en comento otorga la cancelación de alimentos (teniendo la suscrita el derecho de percibirlos) ?, lo anterior encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia:

Época: Novena Época

Registro: 195717

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Tipo Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo VIII, Agosto de 1998

Materia(s): Civil

Tesis: VI.2o. J/142

Pag. 688

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VIII, Agosto de 1998; Pág. 688

ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.” (La transcribe).

*Ahora bien, los argumentos vertidos por el Juez de Primera Instancia, no dilucidan un verdadero razonamiento jurídico, así como tampoco (a criterio de la de la voz) realiza una correcta motivación y fundamentación conforme la ley de la materia lo establece, dejándome en un estado de indefensión, pues solo refiere que al haberse extinguido la relación de parentesco, carezco del beneficio de la presunción legal, no obstante se acreditó en el juicio de alimentos definitivos y que originó la acción del presente negocio, que la suscrita no tengo medios que garanticen mis alimentos ya que durante la duración de matrimonio y que lo fue aproximadamente *****, quien lleva la voz se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de nuestros hijos, de igual forma no tengo una calificación profesional o técnica en la cual me haya desempeñado previo al matrimonio, ni durante el matrimonio que me permita allegarme de sustento alguno, resultando con esto una nula probabilidad de acceder al mercado laboral, dando como resultado que la suscrita en mi carácter de acreedor alimentista no he dejado de necesitar los alimentos pues no gozo con medios bastantes que me permitan allegarme de ellos, ello en relación a la fracción II del artículo 295 del Código Civil vigente en la entidad, en consonancia con el*

diverso artículo 242 del código adjetivo vigente en el estado en cuanto a su fracción VI, el cual establece que no procede la acción a falta del cumplimiento del plaza o condición a la que está sujeta la acción intentada. De igual forma y como se acreditó en el expediente de mérito, la suscrita no tengo casa habitación, ni bien mueble o inmueble propiedad de la suscrita que me permita ser habitado para mi libre y sano desarrollo, ya que el bien inmueble que cohabitamos durante la vigencia del matrimonio es propiedad del deudor alimentista y del cual no gozo derecho alguno, sin que obre ninguna prueba en contrario. Todos estos hechos negativos, recaen en el actor la obligación de allegar de medios probatorio al juez para la procedencia de la cancelación de alimentos no así en la suscrita, ya que es de derecho explorado que aquel que afirma está obligado a probar, de igual manera los hechos negativos no conllevan carga probatoria.

Es decir, en el presente negocio para su procedencia conforme al artículo 295 del Código Civil de Tamaulipas vigente, la de la voz esgrime dentro de los argumento de excepción que el actor no allego de elementos bastantes que prueben que la suscrita en mi "calidad de acreedora" me encuentro dentro de alguno de los supuestos que la Ley determina para efecto de dejar de percibir alimentos, por lo cual estimo que viola los numerales 4 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), en los cuales se plasman los derechos de la mujer de gozar de libertad plena interpretada como su autorrealización en todos los ámbitos de la vida, de ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales; lo que deviene importante en el presente caso, pues es derecho explorado que las autoridades están obligadas a actuar con perspectiva de género ello con el ánimo de generar una clara asimetría con respecto de los

derecho, sirva de sustento a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

“JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ADVIERTAN LA ACTUALIZACIÓN DE UN PREJUICIO DERIVADO DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE AFECTEN A UN MIEMBRO DE LA FAMILIA O PAREJA DEBEN ELIMINARLO, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD.” (La transcribe).

Por lo que en este orden de ideas, y a criterio de la de la voz, la autoridad de primera instancia no hace un análisis sucinto, exhaustivo y equitativo conforme al numeral 112 fracción III y IV del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, de todas y cada una de la excepciones expuestas por la ahora acreedora, violando con ello el derecho de la suscrita a la realización de una vida digna, ya que en su momento oportuno la de la voz acredito la relación de parentesco por la cual nació el derecho de la suscrita de solicitar alimentos, acción que no concierne en el presente negocio ya que el numeral 295 del Código Civil de Tamaulipas es muy claro al establecer las hipótesis legales por las cuales se deberá de suspender dicha obligación, mismas que lo son : “ I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, II.- Cuando el acreedor alimentista deja de necesitar los alimentos, III.- En caso de delito, conducta antisocial o daños graves inferidos intencionalmente por el alimentario contra el que deba darlos, IV.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa, de la falta de aplicación al trabajo o de algún otro hecho injustificado, mientras subsistan estas causas; V.- Si el acreedor alimentario, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandone la casa de éste por causas injustificadas”; hipótesis que el acreedor alimentista no probo ni de forma indiciaria que se encuentra inmersa la suscrita, carga de la prueba que no recae en la parte demandada, por lo que opera en favor de la suscrita la

presunción legal de seguir necesitando los alimentos salvo prueba en contrario, cualquier otro hecho a ser probado ya lo fue por parte de la voz en el juicio que originó la carga de obligación al deudor alimentista, sin embargo en la presente acción de cancelación de alimentos el deudor alimentista debió acreditar cualquiera de las fracciones anteriormente enunciadas, ello para la procedencia de la cancelación de la pensión alimentista, cosa que en el caso en la especie, no aconteció, aun cuando se haya disuelto el vínculo generador de la obligación en juicio aparte, sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial :

“ALIMENTOS. EL DERECHO A RECLAMARLOS ES IMPRESCRIPTIBLE Y NO SE EXTINGUE POR NO HABERLOS EXIGIDO EN EL JUICIO DE DIVORCIO RELATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).” (La transcribe).

Es importante tomar en cuenta el actor no pretende desvirtuar mi aseveración, no se opone o manifiesta tener conocimiento de alguna falsedad, precisamente porque está plenamente consciente de que en el presente caso, la suscrita no me encuentro dentro de uno de los supuestos que la ley establece para que opere la cancelación de alimentos, tal y como lo mencioné, por lo que el Juez que conoce en primera instancia, no cumple al extremo los criterios que establece la ley en su artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, en el sentido de que las sentencias deberán ser exhaustivas, deberán de referirse a todos los hechos de la demanda así como a las excepciones hechas en la contestación de la misma, haciendo con ello en análisis lógico-jurídico sobre la motivación del sentido de la sentencia, así como una correcta fundamentación de la misma, violando con ello sistemáticamente los derechos de la parte demandante .

AD CAUTELAM

Para efectos de la calificación del presente recurso y conforme al Artículo 932 del Código de Procedimientos

Civiles vigente en la entidad, la suscrita manifiesta que el Juez deberá ordenar dicha calificación en ambos efectos debiendo por ello suspender la ejecución de la resolución recurrida y que en virtud del presente escrito se impugna, lo anterior mientras el recurso no se decida y el auto de sentencia quede firme, ello encuentra sustento en lo establecido en el diverso numeral 937 del mismo ordenamiento jurídico. Ahora bien, en caso contrario y suponiendo sin conceder que el presente recurso sea calificado en diverso sentido a lo expresamente solicitado, la de la voz me apago a lo establecido en el artículo 938 del multicitado ordenamiento; ello, toda vez que considero que, en tratándose de asuntos de orden familiar y estado de las personas, calificar el presente recurso de apelación en ambos efectos se estará actuando conforme a la ley de la materia así lo regula, tal como se aprecia de la simple lectura del artículo 941 del código de procedimientos civiles vigente en el estado de Tamaulipas, y el reza a la letra: (lo transcribe).

Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio jurisprudencial, los cuales rezan:

“APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA QUE CANCELA ALIMENTOS PROVISIONALES. PROCEDE EN AMBOS EFECTOS Y SIN GARANTÍA.” (La transcribe).

De lo anterior se coligue que toda vez que el carácter de los alimentos estriba en la naturaleza del estado de necesidad en el que fueron otorgados, este mismo precepto debe de prevalecer en todo momento, de lo contrario no tendría sentido el recurso de apelación, y ello es así, ya que los efectos en contrario estribarían en actos de difícil reparación para los derechos de la apelante ya que es de conocimiento explorado que el carácter de los alimentos son orden público e interés general.

--- **TERCERO.-** Los agravios propuestos por la apelante
***** , se estiman fundados, lo que conduce a la

revocación de la sentencia recurrida, para ordenar la reposición del procedimiento, en virtud de que, al analizar el juicio con perspectiva de género resulta que las pruebas que obran en autos son insuficientes para decidir la controversia, pues no permiten aclarar la situación de vulnerabilidad o desventaja respecto de dicha recurrente, quien desde el escrito de contestación a la demanda manifestó que durante el matrimonio habido con ***** se dedicó única y exclusivamente a las labores del hogar y del cuidado de los hijos que procrearon quienes hoy son mayores de edad. Lo anterior, porque se desconoce cuál es el estado socioeconómico actual de la apelante, esto es, si además de la pensión que percibe de su ex cónyuge, cuenta con diversos ingresos u oficio que le permitan satisfacer sus necesidades alimenticias, circunstancia que es preciso conocer, toda vez que ello incide en los aspectos que deben tomarse en consideración para determinar la subsistencia o no de la obligación alimentaria después del divorcio.-----

--- Al respecto, es conveniente destacar que el hecho de que la ahora recurrente esté actualmente divorciada del actor de la acción de cancelación de pensión alimenticia, no constituye una causa suficiente para suspender la pensión alimenticia que actualmente percibe y que se decretó en el diverso expediente ***** del índice del propio juzgado, tramitada en su carácter de cónyuge que en ese entonces ostentaba; máxime que, como se dijo, la recurrente expresó que se dedicó únicamente a las labores del hogar y a la crianza de sus dos hijos ahora mayores de edad; por lo que, la Juez de la instancia, tenía la obligación de ponderar

las circunstancias especiales del caso a efecto de decidir lo
conducente.-----

--- Ahora bien, los artículos 264 y 279 del Código Civil del Estado
disponen:-----

“Artículo 264.- En caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias:

- I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;
- II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;
- III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;
- IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;
- V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y
- VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en ***** o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio.

“Artículo 279.- Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale”.

--- De los anteriores preceptos legales se desprende que, en caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor

del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta una serie de circunstancias como son: a) La edad y el estado de salud de los cónyuges; b) Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; c) Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; d) colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; e) medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.-----

--- Asimismo, que en la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad; que el derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en ***** o haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio. Los cónyuges deben darse alimentos y que la ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale.-----

--- Por su parte, de las constancias que integran el juicio de origen se advierte lo siguiente:-----

1.- El actor ***** sustentó los hechos de la demanda sobre cancelación de pensión alimenticia en la circunstancia de que estuvo ***** con la C. *****, que procrearon dos hijos quienes en la actualidad son mayores de edad; que ésta última promovió juicio sumario civil sobre alimentos (veinticuatro de abril dos mil doce); que al haberse disuelto el

vínculo matrimonial que los unía, mediante sentencia dictada dentro del expediente***** del índice del juzgado primero de primera instancia de lo familiar del segundo distrito judicial, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y, por ende, no existir vínculo de parentesco con la demandada y, toda vez que goza de cabal salud puede allegarse sus propios alimentos, pues cuenta con cincuenta y seis años de edad y, por tanto, debe cancelarse la pensión alimenticia establecida mediante sentencia dictada por el juez cuarto de primera instancia de lo familiar, en el expediente ***** , equivalente al treinta por ciento de los ingresos que percibe como jubilado de *****.-----

2.- En ocurso de ocho de enero de dos mil veinte, ***** dio contestación a la demanda, en la que entre otras defensas manifestó que se le otorgó una pensión alimenticia por el treinta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe ***** , como jubilado de *****; que los alimentos se otorgan en base a la existencia de un título generador o relación fundante, la necesidad de recibirlos y la posibilidad económica del deudor alimentista, cuyos requisitos se cumplieron dentro del juicio sumario civil sobre alimentos definitivos que promovió, donde el Juez de primer grado determinó otorgarle la pensión alimenticia definitiva que actualmente percibe, porque acreditó que durante el matrimonio se dedicó única y exclusivamente a las labores del hogar y, por esa razón, no tuvo la posibilidad de desarrollar algún oficio que le permitiera sostenerse. Que el actor no probó que ella tuviera una

profesión u oficio que le permitan solventar sus alimentos y, por el contrario, quedó probado que durante el tiempo que duró el matrimonio siempre se dedicó al trabajo del hogar; al efecto, opuso la excepción que fundó en lo dispuesto por los artículos 245 y 295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que hizo consistir en que el actor no acreditó que en su carácter de acreedora no haya dejado de necesitar alimentos.-----

3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, el juez de primer grado dictó la sentencia materia del presente recurso de apelación, en la que declaró procedente la acción principal de cancelación de la pensión alimenticia que por el treinta por ciento de los ingresos del aquí actor, el diverso expediente ***** del índice del propio juzgado de los autos, e improcedente la excepción opuesta por la demandada.-----

--- Ahora bien, la circunstancia de que a la fecha de la emisión de la sentencia de primer grado (diecisiete de marzo de dos mil veinte) los contendientes se encuentren *****, no implica ausencia de legitimación para demandar los alimentos, sino por el contrario, la ley es clara en establecer que aún decretado el divorcio persiste esa obligación mutua entre quienes fueron cónyuges, de tal suerte que corresponderá a las autoridades jurisdiccionales ponderar las circunstancias descritas para determinar su procedencia.-----

--- Esto es así, dado que el simple hecho de que haya quedado disuelto el vínculo matrimonial, de conformidad con lo expuesto, no implica de suyo el cese de la obligación de darse alimentos, pues como ya se dijo, el juez resolverá sobre el pago de alimentos

a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; para lo cual tomará en cuenta una serie de circunstancias como son: la edad, la calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia, medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades, etcétera, en términos de lo dispuesto en el artículo 264 del Código Civil del Estado.-----

--- Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que dentro de la llamada incapacidad para obtener lo necesario para su subsistencia, se entiende incluido el supuesto del cónyuge que por haber asumido en mayor medida que el otro las cargas domésticas y de cuidado, se encuentre en una desventaja económica tal que incida en su capacidad para hacerse de medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.-----

--- Lo anterior -precisa el Alto Tribunal-, toda vez que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo, constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria que debe ser compensada, en la medida de lo posible, por quien se benefició directamente de dicho reparto de responsabilidades en la familia, de conformidad con el mandato de igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de ambos esposos en caso de disolución del vínculo conyugal. -----

---- Consideraciones que se desprenden de la tesis 1a. LXIV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, Tomo I, página 978, de rubro y contenido:-----

“DIVORCIO. TIENE DERECHO AL PAGO DE ALIMENTOS AQUEL EX CÓNYUGE QUE, POR HABER ASUMIDO EN MAYOR MEDIDA QUE EL OTRO LAS CARGAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO DURANTE EL MATRIMONIO, SE ENCUENTRA EN UNA DESVENTAJA ECONÓMICA QUE INCIDA EN SU CAPACIDAD PARA SUFRAGAR SUS NECESIDADES BÁSICAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 476 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE HIDALGO). Según la literalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, en los casos de divorcio, el juez podrá decretar el pago de alimentos a favor del cónyuge que esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia y carezca de bienes inmuebles. Esta obligación cesará cuando el acreedor incapacitado contraiga nuevas nupcias; se una en ***** o mantenga una relación de pareja; recupere la capacidad; o sobrevenga el nacimiento de un hijo de persona distinta al deudor. Ahora bien, a fin de respetar el derecho humano de igualdad y no discriminación, este precepto debe interpretarse conforme a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, de forma tal que en la porción normativa que hace referencia a que el cónyuge solicitante del pago de alimentos "esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia", se entienda incluido el supuesto del cónyuge que, por haber asumido en mayor medida que el otro las cargas domésticas y de cuidado, se encuentre en una desventaja económica tal que incida en su capacidad para hacerse de medios suficientes para sufragar

sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Lo anterior, toda vez que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo, constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria que debe ser aliviada, en la medida de lo posible, por quien se benefició directamente de dicho reparto de responsabilidades en la familia, de conformidad con el mandato de igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de ambos esposos en caso de disolución del vínculo conyugal”.

--- En cuanto a la necesidad de recibir alimentos, el Máximo Tribunal del país precisó que, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta.-----

--- Lo anterior -dijo el Alto Tribunal-, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al deudor alimentista a quien

le corresponde demostrar lo contrario; es decir, que la ex esposa está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias.---

--- Consideraciones que se desprenden de la jurisprudencia 1a./J. 6/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, página 619, de rubro y texto siguientes:-----

“ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ) El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la

forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias”.

--- También la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que, en todo caso, el juez del conocimiento es quien debe evaluar la pertinencia de que subsista un deber alimentario.-----

--- Lo que se desprende de la parte conducente de la tesis 1a. CCLIV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 470, que dice:-----

“OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. EL JUEZ DEBE EVALUAR LA PERTINENCIA DE QUE SUBSISTA A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD El principio de proporcionalidad en los alimentos implica no sólo realizar un balance entre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor. A juicio de esta Primera Sala, también implica verificar que el deber no resulte desproporcionado en cuanto a su duración. Ahora bien, el artículo 271 del Código Civil del Estado de México (abrogado por decreto del 7 de junio de 2002) establece: "En los casos del divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente." Como se aprecia, este precepto permite que se imponga una obligación alimentaria por un tiempo indefinido, siempre que la acreedora permanezca soltera y viva honestamente. En este sentido, si bien la obligación alimentaria puede surgir proporcional, es susceptible de volverse inconstitucional cuando se prolongue en el tiempo de tal forma que se vuelva excesiva e injustificada para el deudor alimentario. En consecuencia, cuando el juzgador evalúe la pertinencia de que subsista un deber alimentario, debe tomar en cuenta que la duración de los alimentos está sujeta a respetar el principio de proporcionalidad. Con esta base, el juzgador puede dejar sin efectos una obligación alimentaria que, a su juicio, se ha vuelto excesiva e injustificada en el tiempo.”

--- Luego, si en la sentencia recurrida (fojas noventa y cinco a la ciento dos), la Juez de la instancia afirmó que, al haberse disuelto el vínculo matrimonial, desapareció la obligación del actor de otorgar alimentos a su ex cónyuge, esto es, que no existe título jurídico de esposa para seguir percibiendo alimentos; por lo que, ante tal proceder, es claro que se violentaron los derechos humanos en perjuicio de la apelante.-----

--- Así es, la Juez A quo pasó por alto que la propia ley prevé cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y, en este supuesto, resolverá sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, carezca de bienes, etcétera, para lo cual, reiterando, tomará en cuenta una serie de circunstancias como son: la edad, la calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia, medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades, etcétera, en términos de lo dispuesto en el artículo 264 del Código Civil del Estado.-----

-- Al no estimarlo así, la Juez de primer grado inobservó los criterios antes invocados, emitidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que le impidió juzgar el asunto atendiendo a la equidad de género.-----

--- A manera de ilustración, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 836, de rubro y texto:-----

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a

fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género". (Lo subrayado es por la Sala).

--- Por tanto, éste Tribunal de Alzada considera que prevalece la presunción de necesidad alimenticia de la apelante consistente en la manifestación contenida en la contestación de demanda, en el sentido de que durante el matrimonio se dedicó por entero a la atención del hogar conyugal, lo que le impidió desarrollar experiencia en algún oficio; lo anterior, porque el deudor

alimentista no destruyó la aludida presunción con pruebas suficientes.-----

--- Ahora bien, al tratar de analizar las diversas circunstancias a que se refiere el artículo 264 del Código Sustantivo Civil del Estado, con el propósito de decidir sobre la pertinencia de que subsista o no la obligación alimenticia, bajo una perspectiva de género que permita visualizar las situaciones de desventaja en la persona de la apelante; la Sala advierte lo siguiente:-----

a).- No consta que ***** cuente con bienes inmuebles propios, ni que desempeñe algún trabajo remunerado económicamente, ni que haya referido tener algún oficio o profesión; mientras que ***** es jubilado de la empresa *****.-----

b).- El matrimonio tuvo una vigencia de ***** aproximadamente, pues los ahora contendientes contrajeron matrimonio el *****, y disolvieron el mismo mediante sentencia ejecutoriada el *****.-----

--- Tales circunstancias impiden impartir justicia con base en una perspectiva de género, pues son insuficientes para verificar la situación de vulnerabilidad y desventaja que vivió la actora durante el matrimonio al haber asumido presuntivamente en mayor medida las cargas domésticas y de cuidado de las hijos ahora mayores de edad; lo anterior, imposibilita resolver la controversia, pues la ausencia de pruebas propicia el desconocimiento del estado de necesidad alimenticia de la demandada.-----

--- En consecuencia, y a efecto de que la decisión del caso encuentre apoyo en una perspectiva de género que evite un desequilibrio por cuestión de género entre las partes en controversia; y con el propósito de aclarar la situación de vulnerabilidad en la persona de la apelante, procede la reposición del procedimiento de primera instancia, para el único efecto de que la Juez, oficiosamente, enunciativa no limitativamente, desahogue los siguientes medios de prueba:-----

1.- Requerir a ***** para que manifieste, bajo protesta de decir verdad, si cuenta con un empleo, o con un oficio que le permita emplearse; y en uno u otro caso, exhiba la documentación correspondiente que así lo acredite. Dicha información, deberá ser constatada a través de informe que el juez deberá solicitar a quien corresponda.-----

2.- Ordenar un estudio socioeconómico en el domicilio en que habitan tanto el actor como la demandada, a realizarse a través de un trabajador social adscrito al CECOFAM Altamira, con el propósito de constatar el entorno socioeconómico en el que se desenvuelven los contendientes.-----

--- Hecho lo cual, con apoyo en una perspectiva de género, la Juez de primera instancia deberá dictar la resolución que en derecho corresponda, siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia.-----

--- Bajo las relatadas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles, lo que procede es revocar la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto de Primera

Instancia de lo Familiar con residencia en Altamira, Tamaulipas, y en su lugar decretar la reposición del procedimiento para los efectos que han quedado indicados.-----

--- Conforme al sentido del presente fallo, no se surte la hipótesis contenida en el numeral 139 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, por lo cual no cabe realizar especial condena de costas de segunda instancia.-----

--- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105, fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 926 y 949 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, se resuelve:-----

--- **PRIMERO.-** Son fundados los conceptos de agravio expresados por la parte demandada, contra de la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar con residencia en Altamira, Tamaulipas.-----

--- **SEGUNDO.-** Se revoca la sentencia apelada a que alude el punto resolutive anterior y en su lugar se decreta la reposición del procedimiento de primera instancia, para los efectos precisados en el considerando tercero de este fallo de segunda instancia.-----

--- **TERCERO.-** No se hace especial condena al pago de los gastos y costas por la tramitación de la segunda instancia.-----

--- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-** Con testimonio de la presente resolución retórnese el expediente al Juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.-----

--- Así lo resolvió esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por

unanimidad de votos de los Magistrados Alejandro Alberto Salinas Martínez y Jesús Miguel Gracia Riestra, en términos del artículo 27 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, siendo Presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con la Licenciada Sandra Araceli Elías Domínguez, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.-----

Lic. Alejandro Alberto Salinas Martínez
Magistrado Presidente

Lic. . Jesús Miguel Gracia Riestra
Magistrado Ponente

Lic. Sandra Araceli Elías Domínguez.
Secretaria de Acuerdos.

--- Enseguida se publica en Lista de Acuerdos. CONSTE.-----
L'AASM/L'JMGR/L'SAED/L'ESD/msp/olm.-

La Licenciada Elizabeth Sosa Dávila, Secretaria Proyectista, adscrita a la Segunda Sala Colegiada Civil, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución doscientos veintiséis, dictada el Jueves, 19 de

noviembre de 2020, por los Magistrados Alejandro Alberto Salinas Martínez y Jesús Miguel Gracia Riestra, constante de veintiséis fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: el nombre de las partes y el de su fuente de trabajo; información que se considera legalmente como confidencial, sensible o reservada, por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en la primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2021 del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 29 de enero de 2021.